



## — ACCESO LIBRE —

#OPINIÓN

### HUACHICOL: DEL DUCTO AL DESPACHO

*La Fiscalía ha documentado una red de contrabando de combustibles que involucra más de 550 empresas y ocho puertos estratégicos*



# E

n diciembre de 2018, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el cierre de los ductos de PEMEX para frenar el robo de combustible, uno de los delitos más rentables heredados

del sexenio de Enrique Peña Nieto. La decisión, aunque buscaba golpear al crimen organizado, provocó un fuerte desabasto a inicios de 2019.

Para resolver la crisis, se abrió paso a un esquema de importación simulada que, con el tiempo, dio forma a una nueva modalidad de corrupción: el huachicol fiscal, la herencia maldita del primer piso de la Cuarta Transformación.

El gobierno compró pipas, militarizó puertos y aduanas, pero el contrabando de combustibles —esa importación ilegal disfrazada que evade el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

(IEPS)— terminó por infiltrarse en todos los niveles de poder. Hoy, las pérdidas son incalculables.

“No hay un dato oficial de Hacienda sobre cuántos recursos significa el contrabando de combustible, no existe a la fecha porque tenemos que cuadrar toda la información”, reconoció recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando más dudas que certezas sobre el verdadero gran tamaño de este desfalco.

Sus palabras contrastan con la cifra de 600 mil millones de pesos en daños al erario que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó a la Cámara de Diputados. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, corrigió: sólo existen 16 mil millones de pesos querrellados ante la FGR, correspondientes a los expedientes abiertos, no a casos concluidos.

***Si este sexenio quiere marcar diferencia, debe romper con la impunidad que heredó***



La danza de las cifras no es sólo un problema contable, sino político. El involucramiento de las Fuerzas Armadas, de altos funcionarios morenistas y de empresarios del sector energético vuelve el tema del huachicol fiscal un campo minado. Tirar de ese hilo podría arrastrar a muchos.

La Fiscalía General de la República ha documentado una red de contrabando de combustibles que involucra más de 550 empresas y ocho puertos estratégicos. Una operación que va desde la importación ilegal hasta la falsificación de documentos, para lo cuál se requiere de una amplia red de dependencias y personas.

Y resulta especialmente escandaloso que la Secretaría de Marina sea la institución más golpeada por las revelaciones. No es un dato menor: los sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, titular de la dependencia entre 2018 y 2024, fueron señalados como líderes en la red de contrabando.

A un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, las cifras delictivas muestran una mejora gracias al cambio de estrategia. Pero si este sexenio quiere marcar diferencia, debe hacer algo más: romper con la impunidad que heredó. El huachicol fiscal no es sólo un delito económico, es un espejo de la corrupción institucional. Mantener abiertas las investigaciones y castigar a los responsables sería la señal más clara de que el nuevo gobierno no está dispuesto a proteger los pecados del pasado.

[CARLOSZUNIGAPEREZ@GMAIL.COM](mailto:CARLOSZUNIGAPEREZ@GMAIL.COM) /

@CARLOSZUP